

ÍNDICE AI: AFR 17/25/97/s

EMBARGADO PARA LAS 00:01 HORAS GMT DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 1997

Camerún: Descarado desprecio hacia los derechos humanos

En un informe publicado hoy, Amnistía Internacional describe en profundidad y con detalle el constante y creciente desprecio del gobierno de Camerún hacia los derechos humanos fundamentales.

Amnistía Internacional ha declarado: «En Camerún se violan constantemente los derechos humanos, en muchos casos ante una actitud de las autoridades de ignorar o infringir deliberadamente las leyes. El gobierno apenas se hace responsable de estas violaciones y, por lo general, los responsables quedan impunes».

Centenares de críticos y opositores al gobierno -- miembros y simpatizantes de partidos políticos de oposición, periodistas, activistas de derechos humanos y estudiantes -- han sufrido hostigamientos, agresiones, arrestos y encarcelamientos.

Tal como ha afirmado Amnistía Internacional: «La creciente tensión política en un año de elecciones tanto parlamentarias como presidenciales, unida a la cuestión de la autonomía de la minoría de habla inglesa de Camerún, amenaza con deteriorar aún más la situación de los derechos humanos en el país».

A medida que se aproximan las elecciones presidenciales, que deben tener lugar en octubre o noviembre, las autoridades de Camerún parecen dispuestas a continuar reprimiendo la oposición política. Un ex miembro del gobierno que dimitió en abril y anunció su intención de presentarse a las elecciones como candidato contra el presidente Paul Biya ha sido encarcelado, junto con el director de su campaña presidencial.

Unas 300 personas, en su mayoría miembros y simpatizantes del principal partido político de oposición, el Frente Socialdemócrata, fueron detenidas en las provincias noroccidental y suroccidental, baluartes ambas de la oposición, a fines de marzo de este año, siete semanas antes de las elecciones parlamentarias del 17 de mayo.

Estas detenciones se produjeron tras una serie de ataques armados, atribuidos por las autoridades a un grupo que apoya la independencia de las dos provincias de habla inglesa de Camerún, contra instalaciones militares, policiales y civiles de varias ciudades de la provincia noroccidental. Diez personas, entre ellas tres gendarmes, murieron en los ataques. Aunque Amnistía Internacional reconoce la responsabilidad del gobierno de hacer comparecer ante los tribunales a los autores de delitos, muchos de los detenidos parecían haber sido arrestados simplemente por su apoyo al Frente Socialdemócrata, sin que existiera ninguna prueba de su implicación en los ataques.

Una cantidad cada vez mayor de periodistas han sido encarcelados tras ser juzgados y condenados por delitos comunes; otros han sido recluidos sin que se les imputaran cargos. Los periodistas son sometidos a constantes hostigamientos y agresiones, y los periódicos son suspendidos y confiscados.

Amnistía Internacional ha declarado: «El gobierno debe garantizar que se respeta el derecho a la libertad de expresión y asociación. Las personas que hayan sido detenidas por sus opiniones y

actividades políticas, y que no hayan hecho uso de la violencia ni hayan abogado por ella, deben ser liberadas inmediatamente».

La tortura y los malos tratos tanto a detenidos políticos como a presos comunes siguen siendo una práctica sistemática. Al menos cinco de los detenidos en relación con los sucesos de la provincia noroccidental a fines de marzo han muerto desde entonces a consecuencia de la tortura y los malos tratos y la posterior falta de asistencia médica. Otras personas han resultado muertas o gravemente heridas cuando las fuerzas de seguridad han hecho uso de lo que parece ser una fuerza excesiva y letal.

Los presos permanecen reclusos en condiciones que suponen una negación de sus derechos fundamentales y que constituyen una amenaza tanto para su salud como para su vida. El enorme hacinamiento, la alimentación inadecuada, la falta de asistencia médica y la falta de instalaciones de higiene tienen como consecuencia un elevado índice de mortandad en las prisiones de Camerún. Hay más de cien personas condenadas a muerte y, en enero de este año, se informó de que se había llevado a cabo la primera ejecución desde 1988.

El informe de Amnistía Internacional, *Cameroon: Blatant disregard for human rights*, hace recomendaciones específicas al gobierno de Camerún para que ponga fin a las violaciones sistemáticas de derechos humanos. Amnistía Internacional pide además a la comunidad internacional que tome medidas para garantizar que Camerún cumple todas sus obligaciones de derechos humanos.

La organización ha manifestado: «El historial de derechos humanos de Camerún debe ser rigurosamente examinado por la comunidad internacional, incluidas las Naciones Unidas, la Organización de la Unidad Africana, la Commonwealth y la Unión Europea».